

R. 063/2022



SALA SUPERIOR

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/375/2022**EXPEDIENTE NÚM:** TJA/SRA/I/555/2021**ACTOR:** -----**AUTORIDADES DEMANDADAS:** DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO Y OTRA.**MAGISTRADO PONENTE:** DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA.

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de septiembre de dos mil veintidós. -----

- - - **VISTOS** para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca número **TJA/SS/REV/375/2022**, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha **seis de abril de dos mil veintidós**, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco I, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad citado al rubro, y

RESULTANDO

1.- Mediante escrito presentado el **dieciocho de junio de dos mil veintiuno**, ante la oficialía de partes común de las Salas Regionales Acapulco I y II, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, compareció la -----, a través de su apoderado legal a demandar de las autoridades Presidente Municipal, H. Cabildo, Secretario de Administración y Finanzas, Director de Catastro e Impuesto Predial, y Director de Ingresos, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad del acto consistente en:

“1).- Del Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama la indebida determinación de una revaluación Catastral, SOBRE LOS CUALES LA DIRECCION(sic) DE INGRESOS RELIZO(sic) ILEGAL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CONTENIDO EN EL RECIBO, del ejercicio, 2021 lo que observa de la siguiente tabla comparativa entre el ejercicio 2020 y 2021, QUE A CONTINUACION SE DETALLAN con objeto de establecer LOS INCREMENTOS entre un ejercicio y otro:

<i>numero(sic) de Recibo</i>	<i>Ejercicio de aplicación</i>	<i>Tasa de impuesto</i>	<i>Base catastral</i>	<i>Importe impuesto</i>
200107018	2020	0.012	12,480.00	253.47
2100239825	2021	0.0039	49,920.00	338.82

*Nuevo valor catastral –Base Gravable- del que me entero de su existencia a través del pago realizado a ese H. Ayuntamiento con el recibo con folio 2100239825, antes señalado, pago efectuado el **19 de enero de dos mil veintiuno.***

2).- Del C. Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama el Cobro(sic) en exceso del Impuesto Predial, en razón de utilizar para su cálculo LA DETERMINACION DE UNA BASE CATASTRAL INEXISTENTE, al no haber sido notificada al aquí actor en ningún, momento antes de su aplicación y que resulta SUPERIOR A LA DEL EJERCICIO 2020, hasta en un 300% como se demostrara(sic) enseguida.”

Al respecto, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por acuerdo de fecha **veinticuatro de junio de dos mil veintiuno**, la Magistrada Instructora de la Sala Regional Acapulco I, de este Tribunal de Justicia Administrativa, acordó la admisión de la demanda, se integró el expediente número **TJA/SRA/I/555/2021**, ordenó el emplazamiento respectivo únicamente a las autoridades demandadas Director de Catastro e Impuesto Predial, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingreso, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quienes dieron contestación en tiempo y forma, ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes y opusieron las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, y por cuanto al Ayuntamiento Municipal y Presidenta, ambos del Municipio de Acapulco, no se ordenó su emplazamiento en razón de que no advertirse su participación en la emisión o ejecución del acto impugnado.

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el **siete de marzo de dos mil veintidós**, se llevó a cabo la audiencia de ley declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva.

4.- El **seis de abril de dos mil veintidós**, la Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de

Guerrero, sobreseyó el juicio respecto al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por no haber emitido, ordenado, ni ejecutado el acto que se le atribuye, de lo que se deriva que se siguió el juicio sólo por cuanto al Secretario de Finanzas y Administración y Director de Catastro e Impuesto Predial del mismo Ayuntamiento; por otra parte, de conformidad con el artículo 138 fracción II del mismo ordenamiento legal declaró la nulidad de los actos impugnados para el efecto de que: *“... las autoridades demandadas dejen insubsistente el cobro realizado al actor mediante Comprobante Fiscal Digital de Internet (CFDI) con número de folio 2100239825, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 009-010-002-0000, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto del inmueble ubicado en -----
-----en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del Impuesto Predial correspondiente al año dos mil veintiuno en el cual se respete la base gravable por la cantidad de \$12,480.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en el Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI) con número de folio 2000107028 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, el cual fue realizado por el actor, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente...”*

5.- Inconforme con la sentencia definitiva la autorizada de las autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas, y Director de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, interpuso el recurso de revisión ante la Sala A quo, quien hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta Sala Superior el toca número **TJA/SS/REV/375/2022**, se turnó con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y

CONSIDERANDO

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los municipios, Órganos autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos Descentralizados y los particulares, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y 1º del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado; por otra parte, los numerales 190, 192 fracción V, 218 fracción VIII y 222 del Código de la materia y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, otorgan la facultad a esta Sala Superior para calificar y resolver los recursos de revisión que se interpongan por las partes procesales en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer el presente recurso de revisión hecho valer por la autorizado de las demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha **seis de abril de dos mil veintidós**, emitida por la Sala Regional Acapulco I.

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la sentencia definitiva recurrida fue notificada a las demandadas el día dos de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del tres al diez de mayo de dos mil veintidós, en tanto que, el escrito de mérito fue presentado ante la Sala Regional el nueve de mayo del año en curso, entonces, el recurso de revisión fue presentado en tiempo y forma.

III.- La recurrente vierte en sus conceptos de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación:

“Primero.- Causa agravios la resolución que mediante el presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis representadas lo previsto en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales; Principio de Exhaustividad; Principio de Congruencia Jurídica, Principio de Legalidad, el Principio de Igualdad de Partes, que debe de contener toda sentencia, pues en los dos considerandos señalados como **SEGUNDO Y TERCERO**, de este fallo en el apartado en que causa agravios se lee lo siguiente:

SEGUNDO.-

(...)

Sustancialmente, los ciudadanos SECRETARIO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE INGRESOS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al dar contestación a la demanda en términos similares, invocaron la causal prevista por el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 negando haber emitido el acto que se le atribuye; en ese sentido, a juicio de esta Sala Regional, se observa que efectivamente como lo señala el DIRECTOR DE INGRESOS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, el acto durante la secuela procesal, omitió exhibir prueba alguna con la que acreditara que dicha autoridad demandada hubiera actuado, como autoridad ordenadora o ejecutora del acto que se le atribuye, por lo tanto, ante la inexistencia del acto impugnado, se actualiza la causal prevista por el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763; en consecuencia, procede declarar el sobreseimiento del presente juicio respecto a la autoridad mencionada.

No así, por cuanto al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, ya que a juicio de esta sentenciadora, considera que no es procedente ordenar el sobreseimiento que solicita la autoridad demandada en razón de que el artículo 25 fracciones XXII, XXIV y XXV del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, establece lo siguiente: "La Secretaria(sic) de Administración y Finanzas fungirá como recaudadora del Ayuntamiento y será la encargada de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias municipales; y entre las nuevas atribuciones son las de proponer y controlar las políticas en materia de informática, que deban seguirse para el diseño, desarrollo implementación de sistemas de cómputo y de comunicación interna, al frente de la Secretaria(sic) estará un Secretario de Despacho, al que además de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: fracción XXIII "Administrar el Catastro Municipal", fracción XXIV "Elaborar estudios proyectos y programas para la mejora continua en la administración, control, integración y actualización del padrón catastral mediante la utilización de cartografía digital fotogrametría aérea, y demás técnicas avanzadas para obtener información veraz y completa de los predios urbanos y rústicos obteniendo sus correlaciones de

información técnica y administrativa fracción XXV "Proponer las actualizaciones a las tablas de valores para la justa valuación de predios y construcciones, así como. el precepto legal 26 del Reglamento en mención, indica: "Que para el desempeño de sus facultades y funciones la Secretaría de Administración y Finanzas contará con la Subsecretaria(sic) de Administración y la Subsecretaria de Hacienda y las siguientes Direcciones de Ingresos, de Catastro e Impuesto Predial...." por lo tanto, resulta evidente que dicha autoridad tiene una actuación directa en la emisión de los actos relacionados con el impuesto predial, tal y como consta en el sello de recibido asentado en la factura con número folio 2100247531 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en virtud que, dicha autoridad recibió el pago del impuesto predial que realizó la parte actora.

Por otra parte, el ciudadano DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al dar contestación a la demanda planteada en su contra, invocó las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 78 fracciones XI y 79 fracciones II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, argumentando que la demanda es extemporánea en razón de que estima que en el capitulo(sic) de descripción de los hechos, la actora refiere que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, realizó el pago del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintiuno, y consta en el auto admisorio de demanda que su escrito lo presentó hasta el dos de junio de dos mil veintiuno, siendo que por acuerdo interno de este Tribunal, se determinó al inicio de recepción de demandas a partir del veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, por lo que desde su perspectiva jurídica rebasa por mucho tiempo el plazo establecido en el artículo(sic) 49 del código invocado.

(...)

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede corroborar que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativa contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por el Código de la Materia; así mismo, establecen que procede el sobreseimiento del juicio cuando en su tramitación apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia.

Ahora bien, a juicio de esta Sala Instructora, no se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 78 fracción XI, y 79 fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en razón de que derivado del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, aprobado por el pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID), publicado el treinta de marzo del año en mención en el Periódico Oficial de la Federación, se decretó la suspensión de todos los términos procesales de los juicios que se estaban sustanciando en las Salas Regionales y Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, suspensión que se prorrogó nuevamente del uno al treinta y uno de

marzo de dos mil veintiuno; no obstante lo anterior, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, consideró que debido al prolongado periodo de suspensión de plazos procesales decretado desde el inicio de la declaración de la pandemia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, a la fecha de uno al treinta de marzo de dos mil veintiuno, ordenó incorporar actividades que permitieran anticipar el quehacer jurisdiccional, con la finalidad de evitar congestionamientos al momento de levantarse la suspensión de los plazos correspondientes; por lo tanto, se ordenó la apertura de los plazos procesales el primero de junio de este año dos mil veintiuno, en atención a publicación en el Periódico Oficial del Estado de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, con base a las estadísticas y seguimiento de los contagios por la enfermedad del COVID-19, debido a la disminución de número de contagios, todos los Municipios del Estado transitaron a semáforo verde; es así, que las actividades jurisdiccionales se abrieron a partir del uno de junio de este año dos mil veintiuno, de ahí que, aun cuando el actor señaló que tuvo conocimiento de los actos, el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, fecha en que realizó el pago de la boleta del impuesto predial, y la demanda fue recibida en esta Sala Regional el día dos de junio de dos mil veintiuno, según se observa del sello de recibido de la misma fecha; en consecuencia, no se pueden considerar como actos consentidos, en virtud que todavía en esa fecha no se abrieron los plazos procesales. Ante estas circunstancias, resulta evidente que no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas.

Aunado a ello, la existencia del acto impugnado y el interés legítimo de la actora se encuentran debidamente acreditados en autos con el reconocimiento expreso que realizan las autoridades demandadas, respecto a que no existió una revaluación catastral del inmueble de la actora y solamente utilizó las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, en términos de lo dispuesto por el artículo 134 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado Número 763, así mismo, la sociedad mercantil denominada "-----", adjuntó a su escrito de demanda copia certificada de la escritura pública número veinticuatro mil ciento catorce, de quince de octubre de dos mil doce, que acredita la constitución de la citada sociedad mercantil; además exhibió la impresión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con número de folio 2100239825 de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, respecto de la cuenta catastral número 009-010-002-004, del inmueble ubicado en Lote 29, Manzana 10 Fraccionamiento Magallanes, en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, en la que se determinó una base gravable por la cantidad de \$49,920.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 0/100 M.N.); así como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con número de folio 200107018, de treinta de enero de dos mil veinte, que contiene una base gravable por la cantidad de \$12,480.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.); elementos de prueba visibles a folios 7 a 42 del expediente en estudio; por lo que se le otorga eficacia probatoria a dichas documentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 64, y 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado Número 763; por lo tanto, será al entrar al estudio y resolución de la controversia planteada, cuando se determine si la autoridad demandada actuó dentro del marco de la legalidad o no.

Causa afectación a mis representadas, toda vez que la Magistrada Instructora, al considerar por cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento transgrede en contra de mis representadas lo previsto en el artículo 137 fracción I, del Código de la Materia, en razón de que únicamente asienta que la causal de improcedencia y sobreseimiento sujeta a estudio resulta INFUNDADA, de conformidad con los argumentos vertidos por el demandante en su concepto de nulidad, lo cual deja en estado de incertidumbre jurídica por cuanto a mi(sic) representadas ya que del análisis de la redacción se advierte que solamente se pronuncia por cuanto a la causal prevista en el artículo 78 fracción XI, la cual nos indica sobre los actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente; y la causal contenida en el artículo 79 fracción II.

Sin embargo de dicha transcripción se advierte que la Magistrada instructora, se enfoca solamente en una de las causales de improcedencia y sobreseimiento ofrecidas por mi(sic) representadas dejando de considerar las demás, transgrediendo en contra de mis representadas Principios Constitucionales Fundamentales como lo son Legalidad, Seguridad Jurídica e Imparcialidad.

Además de que el que suscribe sostiene que actualiza la causal de improcedencia contenida en el Artículo 78, fracción XI, la cual nos establece acerca de los actos consentidos.

Apoya lo anterior, las Jurisprudencia(s) números 60 y 61, visibles en las páginas 101 a 103 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, correspondiente a Salas y Tesis Comunes, que expresan:

“ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. *Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo.”*

“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. *Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.”*

Cabe destacar que el artículo 137 fracción I, del Código de la Materia, prevé lo siguiente:

Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso;

No obstante en el presente asunto, el mismo demandante acepta haber consentido los actos en razón de que señala como la fecha en que tuvo conocimiento de los actos y del auto de radicación se advierte la fecha en que de manera extemporánea ingresó su demanda de nulidad ante ese Tribunal, siendo evidente que resulta declarar el presente juicio improcedente, toda vez que se actualiza una causal de indudable improcedencia.

Derivado de lo anterior, se tiene que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 78, fracción XI en relación con el arábigo 79, fracción II

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, pues la parte actora consintió tácitamente las normas que impugna, y por tal razón ese Tribunal a su cargo, se encuentra imposibilitado para realizar pronunciamiento al respecto, debiendo declarar la validez.

CONTINUANDO CON LO MANIFESTADO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA

TERCERO.-

(...)

Ponderando los argumentos y las pruebas aportadas por las partes en el presente juicio de nulidad, en sus correspondientes escritos de demanda y contestación de la misma, así como correspondientes escritos de demanda y contestación de la misma, así como de la contestación a los conceptos de nulidad formulados por la autoridad demandada, esta Instancia Regional considera que los conceptos de nulidad e invalidez del actor son fundados y operantes para declarar la nulidad de los actos impugnados en atención a las consideraciones jurídicas siguientes:

(...)

De la interpretación armónica a los preceptos constitucionales y legales en comento, se advierte que establecen que en el País(sic), todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías(sic) para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, además disponen que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, además que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento

Así mismo, el artículo(sic) 138 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, señala los supuestos con los que procede declarar de los actos impugnados

(...)

Los preceptos legales y reglamentarios anteriormente transcritos establecen que se tendrá como base del impuesto el valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley del Catastro Municipal vigente y su reglamento, además de que el calor(sic) catastral determinado y declarado por el contribuyente, a más tardar el último día del mes de febrero de cada ejercicio fiscal; el valor catastral deberá ser determinado y declarado por el contribuyente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ocurra alguna

modificación de los predios o en su caso de las construcciones(sic); si el contribuyente incumple con lo establecido en las fracciones I, II y III del presente artículo, o bien los valores declarados y determinados sean inferiores a los valores catastrales, la dirección o área de catastro municipal procederá a determinar el valor catastral del inmueble, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda; que la valuación catastral tiene por objeto determinar y actualizar el valor catastral de los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; que la Dirección de Catastro llevará a cabo la valuación y revaluación catastral de los predios de forma unitaria o masiva; que la valuación se debe realizar conforme a las disposiciones jurídicas establecidas la Ley de Catastro del Estado de Guerrero y su Reglamento, y además que se podrán generar los avalúos catastrales por predio, a petición, a petición de parte o de oficio, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial; además que la valuación y revaluación catastral de los predios rústicos y urbanos se hará con aplicación específica(sic) de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, en la forma en que determine esta ley y su Reglamento, así mismo, que la Dirección de Catastro, notificará de forma personal a los propietarios, poseedores o a los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, o en el predio objeto de la operación en el caso de que no haya manifestado domicilio para oír o recibir notificaciones; además disponen que en caso de que se lleve a cabo la valuación o revaluación masiva de bienes inmuebles, la notificación de los nuevos valores catastrales unitarios se hará mediante Edictos, que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en el municipio, así como en la Gaceta Municipal correspondiente.

Los dispositivos de la Ley de Ingresos Número 638 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, correspondiente al año fiscal dos mil veintiuno, refieren que el impuesto predial se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago; que serán objeto de este Impuesto la propiedad de predios urbanos y suburbanos baldíos, la propiedad de predios urbanos y sub-urbanos edificados entre otros; además señalan que son sujetos de este Impuesto, las personas físicas y morales, que ostenten la propiedad o posesión legal y material de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad que revaluación catastral tiene por objeto actualizar el valor catastral a los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio, debiendo la Dirección de Catastro notificar de forma personal a los propietarios, poseedores o a los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, o en el predio objeto de la operación.

En el caso sometido a estudio, una vez que esta Sala

Regional, analizó los medios probatorios, mismos que al ser valorados, encontró que fueron suficientes para lograr los alcances probatorios que permitieran concluir que los conceptos de nulidad del actor resultan fundados y operantes para declarar la nulidad del acto impugnado consistentes en: "1).- Del C. Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama la indebida determinación de una revaluación Catastral, SOBRE LOS CUALES LA DIRECCIÓN DE INGRESOS REALIZO ILEGAL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CONTENIDO EN EL RECIBO, del ejercicio, 2021 lo que se observa de la siguiente tabla comparativa entre el ejercicio 2020 y 2021. QUE A CONTINUACION SE DETALLAN con objeto de establecer LOS INCREMENTOS entre un ejercicio y otro:

(...)

Nuevo valor catastral-Base Gravable- del que me entero de su existencia a través del pago realizado a ese H. Ayuntamiento con el recibo antes señalado, pago efectuado con el recibo con folio 2100239825, antes señalado efectuado el día 19 del mes de enero del año dos mil veintiuno, "2).- Del C. Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama el Cobro en exceso del Impuesto Predial, en razón de utilizar para su cálculo LA DETERMINACIÓN DE UNA BASE CATASTRAL INEXISTENTE, al no haber sido notificada al aquí actor en ningún momento antes de su aplicación y que resulta superior a la del ejercicio 2020, hasta en un 300% como se demostrara enseguida", el cual resulta ilegal, porque en su emisión no se respetaron las garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica, que todo acto de autoridad debe contener, sin atender a lo que disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo oportuno puntualizar que dentro de la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran las formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a cargo de la autoridad que tienen por finalidad garantizar que el particular esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa, es decir, resulta necesario que se otorguen de modo que impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en aptitud de aducir una defensa completa y efectiva; formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: "1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; requisitos que en caso de no respetarse, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

(...)

Lo señalado en líneas anteriores implica que no basta que una Institución de Gobierno que prepara una resolución frente al particular afirme, diga o incluso haga constar que el procedimiento relativo se respetaron tales exigencias, sino que es necesario que efectivamente lo haga; esto es, que notifique al interesado su inicio, haciéndole saber el motivo y fundamento del porque le instauran el procedimiento, que le dé oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le permita alegar y,

finalmente, que emita una resolución que dirima los temas debatidos.

De manera que tomando en consideración que el avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios, mismo que sirve como base gravable para el cobro del impuesto predial respectivo a sus propietarios, es decir, es el acto en el cual se establece uno de los elementos esenciales del referido impuesto, y en el caso particular, la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, admitió que no existió una revaluación catastral del inmueble de la actora ubicado en Lote 29, Manzana 10 Fraccionamiento Magallanes, en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, y solamente utilizó las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, manifestación que para esta Instancia Regional constituye el reconocimiento expreso(sic) de la emisión del acto que se le atribuye, en términos del artículo 134 fracción I, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, se puede establecer con claridad que las autoridades demandadas no respetó el procedimiento de revaluación catastral, previsto por los artículos 4°, primer párrafo, fracciones XIX, XX, XXI y XXII, 6°, 8°, 13, primer párrafo, fracciones V, X y XI, 14, primer párrafo, fracción IV, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; 42, primer párrafo fracción I, 43, 47, 48, 79 y 80 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y 32 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, para determinar la nueva base gravable de la actora, por la cantidad de \$49,920.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), en tal razón, resulta evidente el perjuicio que causa un avalúo catastral efectuado ilegalmente, como en el presente caso ocurre; ya que si bien es cierto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el deber de los gobernados de contribuir con los gastos públicos del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; también es verdad que el sujeto pasivo de la relación tributaria debe conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos.

(...)

Sin que sea óbice a lo anterior, lo argumentado por la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, respecto a que la figura jurídica de estímulo fiscal no puede ser analizada conforme el artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el beneficio otorgado en el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, no atiende a la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones, específicas(sic), sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, como son: objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, época de pago, ni otro que forme parte de su mecánica sustancial, agregando además que se hizo una actualización y para no afectar a los contribuyentes, optaron por reducir la tasa impositiva del 12 al millar por el 3.9 al millar, ello, con

la finalidad de que los contribuyentes erogaran el mismo importe del año inmediato anterior. Precizando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define que el estímulo fiscal es el beneficio de carácter económico concedido por la Ley a un sujeto pasivo, con el objeto de obtener ciertos fines de carácter municipal. Así también, señala que son instrumentos que buscan motivar la realización de actividades determinadas obteniendo los sujetos a los que ha dirigido un beneficio fiscal. Así mismo, el doctrinario José Isauro López López, en su diccionario Contable Administrativo y Fiscal, define que los estímulos fiscales son aquéllos incentivos otorgados a los contribuyentes, estipulados en las leyes fiscales o mediante reglas de carácter general; normalmente para compensar los efectos que provocan ciertos fenómenos económicos o naturales o como aliciente de inversión en ciertas ramas de la economía; De igual forma, se tiene que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Diccionario Jurídico Mexicano, señala la siguiente definición: "Estímulos Fiscales Beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal". Por otra parte, existe una interpretación jurisdiccional que establece que el estímulo fiscal es un subsidio económico por la ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de él ciertos fines parafiscales, que no representan un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que está asumida por el Estado, y así sucesivamente transcribe definiciones, que concluye que, en efecto, el estímulo es una prestación de carácter económico que se traduce en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor, respecto de un impuesto a su cargo. De ahí, que el estímulo fiscal, es una cantidad económica que se enfrenta a las cantidades del erario público que debe ser ingresada por concepto de contribuciones, es decir, se trata de una disminución del importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un tributo, criterio que no es compartido, por esta juzgadora, toda vez que se advierte en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con número de folio 2000107018 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, que se encuentra integrado por los conceptos siguientes: "BASE GRAVABLE \$12,480.00; UNIDAD E48 Unidad de Servicio, CLAVE CONCEPTO 93161600, CONCEPTO: 2020 (BIM1-BIM6) IMPUESTO PREDIAL, PU \$253.47, 2020 (BIM1-BIM6); IMPUESTO ADICIONAL 15% PRO-EDUCACION, P.U: \$38,03; IMPUESTO ADICIONAL 15% PRO-CAMINOS, P.U: \$38,03; TOTAL: \$1,174.45; así mismo, del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con número de folio 2100399825 de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se observa que la autoridad demandada determina los siguientes conceptos. UNIDAD: E48 Unidad de servicio, CLAVE CONCEPTO: 93161600, CONCEPTO 2021 (BIM1-BIM6) IMPUESTO PREDIAL PU \$338.82 TOTAL: \$338.82 BASE GRAVABLE: \$49,920.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/10 M.N.), y que no obstante que suprime el cobro de los impuesto adicionales, como consecuencia del incremento de la base gravable, aumento el impuesto predial, en ese contexto y al no existir constancias en autos con las que la autoridad demandada demostrara la existencia de una revaluación catastral al inmueble propiedad del actor, resulta evidente que la nueva base gravable por la cantidad de \$49,920.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), resulta ilegal.

En otro aspecto, de lo argumentado por la autoridad DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, en el sentido de que la boleta del impuesto predial (recibo de pago) o Comprobante Fiscal Digital de Internet (CFDI) constituye un acto de la administración, al ser la misma autoridad que emite y que por sí mismo, no constituye ningún efecto jurídico, que no es necesario que cumpla con lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los requisitos de fundamentación y motivación, en razón de que únicamente son necesarios y trascendentales cuando la autoridad emisora emita, un acto administrativo considerado como una manifestación unilateral, concreta y externa de la voluntad, que exprese una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública, la cual puede crear, reconocer modificar, transmitir o extinguir derechos u obligaciones, invocando la jurisprudencia con número de registro 176438 cuyo rubro indica TENENCIA O USO DE VEHICULOS, EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACTO DE APLICACIÓN, para finalmente concluir que de conformidad con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, no prevé que el CFDI debe estar fundado y motivado, como lo prevé el artículo 16 Constitucional antes mencionado y 137 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, Número 429, ya que según es considerado como un acto de la administración, circunstancias por el cual la emisión de dicho comprobante es conforme a derecho; criterio que no es compartido por esta sentenciadora, en razón de que, el recibo de pago o Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI denominado también factura, no puede considerarse como un acto de la administración, ya que este finalmente refleja la determinación unilateral de una revaluación catastral, sobre las cuales las demandadas realizaron un incremento desproporcional a la base gravable para el ejercicio fiscal 2021, incremento que el actor se vio constreñido a pagar, de lo contrario, se aplicarían, consecuentemente, multas y recargos, lo que traduce en un acto de autoridad con características de unilateralidad y coercitividad; en razón a lo anterior, procede declarar la nulidad e invalidez del acto impugnado, al actualizarse la fracción II del artículo(sic) 138 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, relativa a la omisión de las formalidades legales que deben revestir los actos administrativos, y en consecuencia se declaran procedentes las pretensiones del actor marcadas con los incisos a), b) y c) de la demanda, sin que dicha declaratoria de nulidad impida a las autoridades demandadas ejercer sus facultades fiscales de verificación y recaudación.

(...)

En las narradas consideraciones jurídicas, y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que rige a este Órgano Jurisdiccional y el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, le otorgan a esta Sala Regional, se decreta el sobreseimiento del presente juicio con respecto del ciudadano DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al encontrarse

debidamente acreditada la causal prevista por el artículo 75 fracción iv del código de la materia; así mismo se declara la nulidad del acto impugnado consistente en: "1).- Del C. Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama la indebida determinación de una revaluación Catastral, SOBRE LOS CUALES LA DIRECCIÓN DE INGRESOS REALIZO ILEGAL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL CONTENIDO EN EL RECIBO, del ejercicio, 2021 lo que se observa de la siguiente tabla comparativa entre el ejercicio 2020 y 2021. QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN con objeto de establecer LOS INCREMENTOS entre un ejercicio y otro:

(...)

Nuevo valor catastral- Base Gravable-del que me entero de su existencia a través del pago realizado a ese H. Ayuntamiento con el recibo antes señalado, pago efectuado con el recibo con folio 2100239825, antes señalado efectuado el día 19 del mes de enero del año dos mil veintuno(sic)." "2).- Del C. Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama el cobro en exceso del impuesto predial, en razón de utilizar para su cálculo la determinación de una base catastral inexistente, al no haber sido notificada al aquí acto en ningún momento antes de su aplicación y que resulta superior a la del ejercicio 2020, hasta en un 300% como se demostrara enseguida"; emitidos por los ciudadanos SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTORA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TJA/SRA/I/555/2021, incoado por "-----", al actualizarse la causal de invalidez prevista por el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos Justicia Administrativa del Estado, Número 763, relativa a la omisión de las formalidades esenciales que deben de revestir los actos de autoridad; y en términos del artículo 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el efecto de la presente sentencia, es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente el cobro realizado al actor mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con número de folio 2100239825, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 009-010-002-0000, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto del inmueble ubicado en -----en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del Impuesto Predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable por la cantidad de \$12,480.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al año dos mil veinte, contenida en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con número de folio 200107028 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, el cual fue realizado por el actor, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.

SEGUNDO.- Ahora bien, resulta violatorio lo considerado por la Magistrada de esa Sala, para determinar la nulidad de los actos emitidos por mi representada, por la supuesta falta de motivación y fundamentación, así como las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos, además la competencia por parte de quien emite los actos, señalando los principios de legalidad y seguridad jurídica

establecidos en el artículo 16 Constitucional, sin embargo, resulta evidente el favoritismo para demandante, ya que la aplicación de los principios resultan aplicables solo para conveniencia de quien demanda y no de las demandadas, transgrediendo en contra de mis representadas el Principio de Igualdad de partes.

Así pues, el cobro realizado por el demandante fue emitido en base a ordenamientos legales específicos previstos en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, número 638, para el ejercicio fiscal 2021.

Es de señalarse a ese H. Tribunal de Justicia Administrativa que **infundado** resulta ser lo considerado por la Magistrada Actuante, al argumentar que se transgrede en contra de la actora lo previsto en el artículo 16 Constitucional, sin embargo, tratándose de un acto realizado a voluntad del gobernado y dentro de la legislación catastral vigente, es decir que los preceptos que facultan al Municipio para cobrar el impuesto predial, son previstos en la Ley de Ingresos número 638 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

De lo anterior, efectivamente, las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción sufrió modificación acorde a derecho el cual se encuentra debidamente fundado y motivado, asimismo el pago realizado por contribuyente es el mismo al del año inmediato anterior, el cual no le ocasiona perjuicio alguno su patrimonio del demandante.

Contrario a lo que manifiesta la Magistrada de la Segunda Sala, la reforma que sufrió las tablas de valores son acorde a derecho, ya que del análisis que realice ese H. Tribunal al Decreto número 640, por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, publicado el 25 de Diciembre del 2020, advertirá que, en los **considerandos tercero y cuarto** de la exposición de motivos se plasmó literalmente lo siguiente: "Que para la elaboración de las Tablas de Valores Catastrales que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo que establece el artículo 25 fracción I, II, III y IV del Reglamento de la Ley número 676 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, la Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, realizó un estudio de mercado, sobre suelo urbano y construcciones con el fin de actualizar los valores de los predios, que durante 15 años no se habían actualizado, siendo valores desproporcionados a la realidad, por lo que se hace necesario acercarse lo más que se pueda al valor real o de mercado, en virtud de que las operaciones inmobiliarias que se presentan contienen valores muy por arriba de lo que muestran las tablas catastrales; es importante señalar que para no incrementar las contribuciones inmobiliarias se propone la reducción de la tasa impositiva considerada la más alta el país que ha sido del 12, para ahora ser solo del 3.9 al millar anual para el ejercicio fiscal 2021 y que en la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de suelo y construcción que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, va enfocada en cumplir el mandato constitucional en término del Artículo quinto transitorio de la reforma que tuvo el artículo 115 de la Constitución General de la

República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Diciembre del año 1999, que marcaba como plazo el ejercicio fiscal del ario 2002 para equiparar los valores catastrales a los de mercado y en contraparte reducir la tasa impositiva para la determinación del impuesto predial"; asimismo, se acredita que los actos de los cuales se duele la parte actora se encuentran debidamente fundados y motivados.

Por otra parte, se tiene que el artículo 9 incisos f) y g) de la Ley de ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, no es vulneratorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios de equidad y legalidad tributaria, y que para su mayor comprensión se trae a la vista el artículo 31, fracción IV Constitucional, el cual señala lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ahora bien, la fracción IV del artículo 31 Constitucional, contiene las siguientes garantías:

- 1. Las contribuciones deben destinarse al gasto público de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio.*
- 2. Deben ser proporcionales y equitativas.*
- 3. Deben estar establecidas en Ley*

Al efecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia de la Fuente del Semanario Judicial de la Federación Torno 187-192 Primera parte, página 113, lo siguiente:

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. *El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto,*

no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

Conforme al criterio anterior, la **proporcionalidad** radica básicamente, en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva; y para que el principio de proporcionalidad permita que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, los tributos deben fijarse de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

La Jurisprudencia invocada concluye en que la **proporcionalidad** se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino al tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que deba encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

Sin embargo, no debe de perderse de vista que la aplicación de los criterios anteriormente expuestos, deben de centrarse en un ámbito tanto de justicia fiscal como del gobernado, toda vez, como se ha dicho, se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintos derechos, pero también la obligación individual pública de los gobernados de contribuir para los gastos públicos de los diferentes niveles de gobierno: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.

Ahora bien, como se dijo con antelación, resulta ser infundado el argumento de la Magistrada Instructora, en atención a los requisitos de proporcionalidad y equidad, ya que de ninguna forma se está transgrediendo lo dispuesto por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apoya lo anterior, la Tesis con número de registro 2022996 de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

IMPUESTO PREDIAL. AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, QUE PREVE UN BENEFICIO FISCAL PARA LOS CONTRIBUYENTES CUYOS INMUEBLES ESTÁN UBICADOS FUERA DE LOS LÍMITES

URBANOS Y SUBURBANOS SEÑALADOS EN EL PLANO DE VALORES DE TERRENO PARA DICHO MUNICIPIO, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.

Hechos: Las autoridades recurrentes señalan que el beneficio fiscal contenido en el artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020, consistente en la aplicación del factor del 0.80 sobre el monto del impuesto predial que les corresponde pagar a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos señalados en el Plano de Valores de Terreno para dicho Municipio, no incide en la mecánica del tributo, porque se aplica una vez que el impuesto predial es determinado, de manera que al no incorporarse a los elementos de la contribución, no le son aplicables los principios de justicia fiscal establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al artículo 48 citado, que prevé el beneficio fiscal aludido, no le son aplicables los principios de justicia tributaria.

Justificación: **Lo anterior, porque el estímulo fiscal mencionado no tiene relevancia impositiva en el impuesto predial, pues no se asocia a alguno de los elementos esenciales de esa contribución –objeto, base, tasa o tarifa y época de pago–, porque se materializa a través de una disminución en la cantidad resultante del cálculo del tributo y, por ende, no se adhiere a aquéllos ni integra su mecánica.**

*En ese orden de ideas, la figura jurídica de estímulo fiscal no puede ser analizada conforme al artículo 31, párrafo primero, fracción IV, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el beneficio otorgado en el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley de Ingresos Municipal vigente, **no atiende a la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones específicas; sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial;** de ahí, lo infundado de los argumentos.*

Sirve de sustento, la Jurisprudencia número 2002148, de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro, XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1243, cuyo rubro y texto es el siguiente:

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. El beneficio en cuestión constituye un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de donde surge el deber de pago, ya que no incide en alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, ni integra su mecánica, pues lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía familiar mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del vehículo respectivo para sufragar los costos que conlleva su uso; por tanto, al no medir la capacidad contributiva de los sujetos obligados ni pretender impedir que

se cause el impuesto respectivo, dicho beneficio no puede analizarse a la luz de los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no impide que su regularidad constitucional pueda examinarse al tenor del artículo 1o. de la Constitución Federal.

Ahora concerniente al argumento de la actora consistente en que en el artículo 12 de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, contemplan conceptos no definidos y amplían el objeto del Impuesto; dicho argumento resulta ser **inoperante.**

Siendo entonces que, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios que ha emitido en materia fiscal, que para el efecto de restituir únicamente en la parte que considere excesivo el pago al del 2021 al del 2020, y no así en forma total, es decir, los Órganos Jurisdiccionales **no deben liberar a los contribuyentes en forma total de la obligación a la cual se encuentran sujetos;** pues en caso, de conceder dicha solicitud se causaría un detrimento económico a la hacienda municipal, además que tratándose de la contribución impuesto lo que se pondera es la **capacidad contributiva, y que en el caso en concreto la parte actora realizó tanto en el ejercicio fiscal 2020 y 2021 el mismo pago por el Impuesto Predial, es decir, no existe perjuicio a su patrimonio; de ahí que no es viable que se le exima de pago ni tampoco que se realice la devolución solicitada.**

En efecto, **infundado** resultan ser las manifestaciones vertidas por la parte actora, ya que contrario a lo que manifiesta, en ningún momento esta autoridad dejó de observar lo dispuesto en el artículo 16 en razón de que esta autoridad no efectuó ningún procedimiento de revaluación, por lo que previo a manifestar lo infundado de su argumento, es importante precisar a ese Tribunal, lo siguiente:

De conformidad con los artículos 115, fracción IV, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 178, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Ayuntamientos tienen la facultad de proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, y que para su mayor comprensión se cita lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...].

IV. [...]

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, **propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a**

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

[...]

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

Artículo 178. Los Ayuntamiento son competentes para:

[...]

XI. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

[...]

De lo anterior, se aprecia que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia y con plena libertad configurativa propondrán a las legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (predial), las cuales revisten una importancia fundamental ya que impactan la base gravable de la contribución.

Efectivamente, el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en principio, aquellos conceptos de la hacienda municipal que quedan sujetos al régimen de libre administración hacendaria, tal como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido de que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios y que, por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como un régimen establecido en la Constitución Federal, tendiente a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre administración y aplicación de sus recurso(sic) y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, pueden priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectado(sic) por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

Ahora bien, de entre aquellos conceptos en particular que forman la hacienda municipal, afecto al régimen establecido por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendientes a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, están las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento e improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus argumentos y consideraciones, así como tomar en consideración las constancias de autos y de forma clara, precisa y lógica, a fin de dictar resolución definitiva; de lo cual se advierte que el presente fallo viola directamente los preceptos 4, 26, 78, 79, 128, 129 y 130 fracciones II y IV del Código de la de materia, como se aprecia en toda la sentencia recurrida, en el entendido que la Sala responsable no respeta los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Imparcialidad, Congruencia y Exhaustividad; asimismo, no funda ni motiva sus argumentos, así pues no entra al fondo del asunto de acuerdo a las constancias que obran en el presente juicio que nos ocupa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 143, Volumen 97-02, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”

En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es evidente que la sentencia de diecisiete de marzo del dos mil veintidós, fue dictada en contravención a ellas, ya que la Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es decir no realizó un examen exhaustivo de la contestación de demanda, así como de las causales de improcedencia que fueron ofrecidas por mis representadas, ya que de haberlo hecho se habría percatado que el presente juicio es improcedente.

Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que

emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

Es claro precisar que la sentencia que se impugna resulta ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, razón suficiente para revocar la sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio.

Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice:

“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada

punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa.”

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe interpretar la demanda en su integridad, así como causales de improcedencia y sobreseimiento y las constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a derecho.

Asimismo, debió haber explorado las causales de improcedencia por ser de cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o no, circunstancia que omite tomar en consideración la Aquo, dictando una sentencia ilegal.

Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con antelación; asimismo, no agoto(sic) el Principio de Exhaustividad, al no examinar y valorar las causales de improcedencia y sobreseimiento, conforme a derecho, es decir, la Magistrada de la Causa, no se pronuncia legalmente, en lo que refiere a las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas en el presente juicio, por lo que, solo se basa en los argumentos vertidos por la parte actora, tal y como se observa en la sentencia que se recurre.

*De lo cual, me permito manifestar a Usted, **ad quem**, que mis representadas actuaron conforme a derecho toda vez que, en el presente juicio se acredita plenamente que la Magistrada resolutora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por los artículos 4, 26, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de la Materia, en razón de que suple las deficiencias de la queja a favor de la parte actora, figura que no se encuentra regulada en el Código de la materia; toda vez que, solo se basa que mis representadas al emitir los actos reclamados por el actor, no son emitidos por autoridad mismos que se hacen sin la debida fundamentación y motivación, por lo que en ningún momento se le transgrede en su contra derecho fundamental alguno, por lo que se debe confirmar la validez de los actos impugnados por haber sido emitidos conforme a derecho.*

*Por lo que respecta a lo señalado por la magistrada, en donde indica que: **“...es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente el cobro realizado al actor mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con número de folio 2100239825, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 009-010-002-0000, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto del inmueble ubicado en***

----- en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del Impuesto Predial correspondiente al año dos mil veintiuno, en el que se respete la base gravable por la cantidad de \$12,480.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al año dos mil veinte, contenida en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con número de folio 200107028 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, el cual fue realizado por el actor, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.”

Cabe aclarar que para ejecutar lo anteriormente descrito, las demandadas se encuentran imposibilitadas para realizarlo, puesto que para aplicar dicha modificación, resultaría necesario emplear una ley anterior a la actual, tal es el caso que se ordena se emita el cobro del impuesto predial correspondiente al año 2021, respetando la base gravable correspondiente al año fiscal 2020, resultando que para ambos años existen leyes de ingresos distintas, siendo la LEY NÚMERO 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO 2020 y la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, respectivamente, y sobra decir que a la fecha de hoy ya existe una ley de ingresos distinta a las dos anteriores, siendo esta última para el ejercicio fiscal 2022.

Apoya lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, que nos señala:

ARTICULO 183.- No se podrá recaudar ninguna cantidad por concepto de impuestos o contribuciones que no estén basados en una ley o decreto emanados del Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo del Estado e Guerrero.

1.- El servidor público que realice erogaciones que no estén previstas en las leyes correspondientes, incurrirá en responsabilidad administrativa y responderá con su patrimonio por las afectaciones realizadas. Si las irregularidades se tipifican como enriquecimiento ilícito, será sancionado conforme lo que determine la ley de la materia; y,

2.- El año fiscal correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre

Siendo entonces que esta autoridad no puede aplicar una ley de Ingresos pasada para un ejercicio fiscal actual, siendo el caso que se nos exige aplicar la base gravable determinada por la LEY NÚMERO 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 a una un impuesto que está determinado por un ejercicio fiscal diferente y que a cuya ley corresponde LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Ahora bien, la exigencia para respetar la garantía de audiencia al aquí actor fue dada, en el entendido que se realizó conforme a derecho, y de manera voluntaria por parte del demandante por lo que en ningún momento se transgredieron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica al actor; asimismo,

manifiesto que el acto emitido fue realizado por autoridad competente, como ya lo manifesté en líneas que anteceden.

En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la sentencia impugnada en razón de que, no existe congruencia jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas conforme a derecho ni actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, simplemente la sentencia combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración, objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que integren este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.

En efecto, como podrá observarse de las constancias que obran en el expediente, queda demostrado que la Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica legalidad y exhaustividad, ha transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a Ustedes Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio o en su defecto se emita otra en la que se declare la validez del acto impugnado.”

IV.- De inicio, se estima pertinente precisar que los aspectos torales de los agravios hechos valer por la recurrente en el recurso de revisión que nos ocupa, esencialmente son los siguientes:

- Refiere que se transgreden en perjuicio de su representada los artículos 14 y 16 Constitucionales, los principios de exhaustividad y congruencia jurídica, de legalidad y de igualdad de partes que debe contener toda sentencia, porque la Magistrada instructora desestima la causal de improcedencia prevista en el artículo 78 fracción XI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, declarándola improcedente, y agrega que la A quo dejó de considerar las demás causales de improcedencia y sobreseimiento, y reitera que a su juicio se actualiza la causal prevista en el artículo 78 fracción XI en relación con el arábigo 79, fracción II del Código de la materia, dada la extemporaneidad en que se presentó la demanda, ya que la parte actora consintió tácitamente el acto que impugna y por tal razón este Tribunal debe declarar la validez de los actos impugnados;
- Reitera que la Magistrada instructora antes de entrar al estudio de fondo, debió valorar las causales de sobreseimiento e improcedencia las cuales son de orden público, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus argumentos y consideraciones, y tomar en consideración las constancias de autos, de forma clara, precisa y lógica, a fin de dictar la resolución definitiva,

y en el caso, la Sala Regional no respetó los principios de legalidad, seguridad jurídica, imparcialidad, congruencia y exhaustividad, al omitir pronunciarse de todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, por lo que la resolución resulta ilegal y contraria a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional;

- Agrega que le causa perjuicio que se haya declarado la nulidad del acto impugnado por la supuesta falta de fundamentación y motivación, así como de las razones particulares que se hayan tenido para su emisión, además de la competencia por parte de quien lo emitió, ya que con dicho criterio se transgrede el principio de igualdad de partes al aplicar los principios de legalidad y seguridad jurídica, solo a favor del demandante y no de las demandadas;
- Aduce que el cobro realizado fue emitido en base a ordenamientos legales específicos previstos en los artículos 9, 10, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, número 638 para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno;
- Así también, señala que es infundado lo considerado por la A quo, al argumentar que se transgrede el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, el pago realizado por contribuyente es el mismo al del año inmediato anterior, el cual no le ocasiona perjuicio alguno a su patrimonio;
- Refiere que en ningún momento esa autoridad debió observar el artículo 16 Constitucional en razón de que no efectuó ningún procedimiento de revaluación;
- Así también, señala que se transgreden en perjuicio de su representada lo dispuesto por los artículos 4, 26, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en razón de que suple la deficiencia de la queja a favor de la actora, figura que no se encuentra contemplada en el Código de la materia toda vez que solo señala que los actos impugnados por la actora fueron

emitidos sin la debida fundamentación y motivación, lo que en ningún momento se transgrede en su contra derecho fundamental alguno por lo que se debe reconocer la validez de los actos impugnados, y solicita se revoque la sentencia recurrida, en razón de que no se valoraron todas y cada una de las pruebas que integran el juicio;

- Señala que el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, no vulnera los artículos 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los principios de proporcionalidad y equidad, ya que la figura jurídica de estímulo fiscal no atiende la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que presentan condiciones específicas; sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial;

- Argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios en materia fiscal, que para efecto de restituir a la parte actora únicamente se debe liberar la parte que se considere excesivo el pago del dos mil veintiuno al del dos mil veinte, no así en forma total, pues en caso de concederse en su totalidad se causaría un detrimento económico a la hacienda municipal, que en el caso concreto la parte actora realizó el mismo pago por el impuesto predial tanto en el ejercicio dos mil veinte y dos mil veintiuno, por lo que no existe perjuicio, a su patrimonio y no es viable que se le exima de pago ni que se realice la devolución solicitada.

- Por último, refiere que respecto a la emisión de una nueva liquidación del impuesto predial por el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno, tomando en consideración el monto de la base gravable del ejercicio fiscal dos mil veinte, las demandadas se encuentran imposibilitadas para realizarla, puesto que para aplicar dicha modificación, resultaría necesario emplear una ley anterior a la actual, ya que para ambos años existen leyes de ingresos distintas, siendo la Ley 638, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez,

Guerrero, para el ejercicio dos mil veinte.

Ponderando los agravios vertidos por la autorizada de las autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas, y Director de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a juicio esta Sala Colegiada resultan **infundados e inoperantes** para revocar la sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones siguientes:

Por cuanto a los argumentos hechos valer relativos a que: *“... se transgreden en perjuicio de su representada los principios de exhaustividad y congruencia jurídica, de legalidad y de igualdad de partes que debe contener toda sentencia, porque la Magistrada instructora omitió pronunciarse respecto a todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, y que antes de entrar al estudio de fondo debió analizar las causales de improcedencia, ya que desestimó la causal de improcedencia prevista en el artículo 78 fracción XI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, dejando de considerar las demás, y reitera que a su juicio se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 78 fracción XI en relación con el arábigo 79, fracción II del Código de la materia, dada la extemporaneidad en que se presentó la demanda, ya que la parte actora consintió tácitamente el acto que impugna y por tal razón este Tribunal debe declarar la validez del acto impugnado....”*, a juicio de esta Sala revisora son **infundados** en virtud de que del estudio efectuado a la sentencia definitiva recurrida, se desprende del considerando segundo la Magistrada Instructora determinó procedente la causal de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer el demandado Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, y sobreseyó el juicio respecto a dicha autoridad con fundamento en el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, al considerar que no emitió, ordenó, ni ejecutó el acto que se le atribuye; por otra parte, respecto al demandado Secretario de Administración y Finanzas del mismo Ayuntamiento, determinó que no era procedente el sobreseimiento, al resultar evidente que dicha autoridad tiene una actuación directa en la emisión de los actos relacionados con el impuesto predial, al haber recibido el pago del impuesto predial que realizó la parte actora.

En relación a que se actualiza la causal de improcedencia invocada por la demandada Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, en su contestación de demanda, contenida en el artículo 79, fracción XI del Código de la materia, la cual consiste en que el acto impugnado se encuentra consentido de manera tácita al haberse promovido la demanda en forma extemporánea, a juicio de la Instructora resultó infundada dicha causal, en razón de que si desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se estableció la suspensión de los términos procesales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, como medida de mitigación y control de propagación de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), reanudándose el uno de junio de dos mil veintiuno, es decir, a partir de esa fecha empezaron a correr los plazos y términos procesales, y si bien es cierto, que mediante diversos acuerdos dictados se adicionaron como actividades, la recepción y radicación de demandas, los días lunes y miércoles, también lo es, que en dichos acuerdos se estableció que ello no representaba la apertura de plazos procesales, por lo que, si la parte actora en su libelo manifestó tener conocimiento del acto impugnado el día diecinueve de enero de dos mil veintiuno, y presentó su escrito de demanda el día dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se concluye que el escrito de demanda se presentó en tiempo, ya que el término de quince días hábiles que establece el artículo 49 del Código de la materia para presentar la demanda, transcurrió del uno al veintiuno de junio de dos mil veintiuno, descontados que fueron los días inhábiles, por tal motivo, la demanda no se presentó de manera extemporánea, ni se actualiza en el caso concreto la causal de improcedencia que hizo valer el demandado Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, en su contestación de demanda.

Por otra parte, los argumentos del recurrente en el sentido de que le causa agravios que se haya declarado la nulidad del acto impugnado por la supuesta falta de fundamentación y motivación, así como las razones particulares que se hayan tenido para su emisión, además de la competencia por parte de quien lo emitió, transgrediendo el principio de igualdad de partes al aplicar los principios de legalidad y seguridad jurídica, solo a favor de la actora y no de las demandadas, en virtud de que el acto

impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, y el pago realizado por contribuyente es el mismo al del año inmediato anterior, el cual no le ocasiona perjuicio alguno a su patrimonio, aduce que se emitió en base a ordenamientos legales específicos previstos en los artículos 9, 10, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, número 638 para el ejercicio fiscal 2021, y que en ningún momento esa autoridad debió observar el artículo 16 Constitucional en razón de que no efectuó ningún procedimiento de revaluación; por lo que agrega que se transgreden en perjuicio de su representada lo dispuesto por los artículos 4, 26, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en razón de que la A quo suple la deficiencia de la queja a favor de la actora, toda vez que señala que los actos impugnados por la actora fueron emitidos sin la debida fundamentación y motivación, y que en ningún momento se transgrede derecho fundamental alguno en contra de la parte actora, por lo que se debe reconocer la validez del acto impugnado, dichos argumentos a juicio de esta Sala Colegiada son **infundados**, por las siguientes consideraciones:

La parte actora en el expediente número **TJA/SRA/II/555/2021**, señaló como acto impugnado el cobro del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con una nueva base gravable con el importe de \$49,920.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 M. N.), contenida en la factura con número de folio 2100239825, de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, respecto al inmueble ubicado en -----
---de la ciudad de Acapulco, Guerrero, con número de cuenta catastral 009-010-002-0000.

Una vez realizado el análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que en ella se expresaron consideraciones tendientes a combatir la ilegalidad del incremento de la base gravable, estimando la actora la falta de fundamentación y motivación al no haberse ajustado a las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no se le dio la oportunidad de conocer el procedimiento de revaluación o el supuesto avalúo de donde se desprenda la supuesta nueva base gravable.

Por su parte, la demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su escrito de contestación de demanda, manifestó que el pago realizado por concepto de impuesto predial, se encuentra debidamente fundado y motivado y que fue por la misma cantidad que el año anterior, por tal motivo el acto impugnado no ocasiona perjuicio al patrimonio de la actora, así también, que no existe por parte de esa autoridad el avalúo o revalúo, en virtud de que únicamente se aplicaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.

Ahora bien, la Magistrada Instructora el seis de abril de dos mil veintidós, al resolver en definitiva el expediente número **TJA/SRAI/555/2021**, consideró que no se respetaron las formalidades del procedimiento como son las garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica que todo acto de autoridad debe contener, tal y como lo dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el demandado Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, admitió que previo a la determinación de la nueva base gravable impugnada, no existió una revaluación catastral del inmueble y solamente utilizó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por lo que, a juicio de la A quo no se respetó el procedimiento de revaluación catastral, previsto por los artículos 4, primer párrafo, fracciones XIX, XX, XXI y XXII, 6, 8, 13, primer párrafo, fracciones V, X y XI, 14 primer párrafo, fracción IV, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, primer párrafo, fracción I, 43, 47, 48, 79 y 80 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y 32 del Reglamento de la Ley número 266 de Catastro, mencionada, para determinar la nueva base gravable por la cantidad de \$49,920.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 M. N.), causando perjuicio a la parte actora al no darle a conocer los datos o elementos que motivaron el incremento de la base gravable y sobre ésta liquidar y cobrar el impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en consecuencia, de conformidad con el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la base gravable, y cobro del impuesto predial.

Criterio que comparte esta Sala revisora, en virtud de que las autoridad demandada determinó el incremento de la base gravable para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y que fue la cantidad de 49,920.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 M. N.), en comparación con la

base gravable del año de dos mil veinte, que era la cantidad de \$12,480.00 (Doce mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), sin especificar qué procedimiento se utilizó para determinar la nueva base gravable, ni señalan alguna disposición jurídica que así lo establezca, así como tampoco se dio a conocer a la propietaria del inmueble el procedimiento o procedimientos que llevó a cabo para determinar la nueva base gravable, dejando a la actora en completo estado de indefensión al desconocer los ordenamientos y motivos legales que se aplicaron en la factura con número de folio 2100239825, de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, situación que trae como consecuencia, que la referida factura transgreda lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 85 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, en relación con lo previsto en los artículos 9 y 12 de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, del Ejercicio Fiscal 2021, en el sentido de que el impuesto predial se causará y pagará de conformidad con el objeto, sujeto, base, tasa o tarifa y época de pago.

Por cuanto al argumento relativo a que la autoridad demandada se encuentra imposibilitada para la emisión de una nueva liquidación del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en la que tome en consideración el monto de la base gravable del ejercicio fiscal dos mil veinte, puesto que señala que para aplicar dicha modificación, resultaría necesario emplear una ley anterior a la actual, ya que para ambos años existen leyes de ingresos distintas, siendo la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio dos mil veinte, al respecto, a juicio de esta Sala Colegiada dicho argumento resulta **infundado** en virtud de que si bien las leyes de ingresos que refiere comprende del uno de enero al treinta de diciembre de cada año, también es verdad que el efecto dado por la Sala Regional en la Sentencia recurrida, es para que la autoridad demandada determine una nueva liquidación del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, tomando en consideración el monto de la **base gravable** del ejercicio fiscal dos mil veinte, esto es, porque se declaró la nulidad del incremento de la referida base gravable dos mil veintiuno, al no cumplir la demandada con las formalidades que legalmente debe revestir para determinar su incremento.

Aunado a lo anterior, de conformidad a los artículos 139 y 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el objeto del juicio de nulidad es restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos cuando resulte procedente la demanda, por lo que deben restablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, y ello sólo se obtiene al dejar sin efectos la base gravable impugnada en el juicio de origen, por el ejercicio dos mil veintiuno, con un importe \$49,920.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 M. N.), contenida en la factura con folio 2100239825, de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, que se aplicó al inmueble con número de cuenta catastral 009-010-002-0000, propiedad del actor.

Por otra parte, cabe precisar la declaratoria de nulidad no implica que el contribuyente deje de pagar el impuesto predial relativo al ejercicio dos mil veintiuno, ya que es una obligación establecida en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, la nueva liquidación del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que emita la demandada debe ser en base al monto de la **base gravable** del ejercicio fiscal dos mil veinte, hasta en tanto dicha base no sea modificada conforme a las formalidades legales del procedimiento.

En esa tesitura, en el caso concreto la sentencia definitiva se emitió conforme a los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y no se transgreden los principios de exhaustividad y congruencia jurídica, de legalidad, seguridad jurídica y de igualdad de partes.

Por otra parte, por cuanto al argumento relativo a que *“... el artículo 9, incisos f) y g) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, no vulnera los artículos 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los principios de proporcionalidad y equidad, ya que la figura jurídica de estímulo fiscal no atiende la capacidad económica de los sujetos obligados, sino al beneficio que genera a los contribuyentes que*

*presentan condiciones específicas; sin que el aludido estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución, ni en otro que forme parte de su mecánica sustancial...”; a juicio de esta Sala revisora es **inoperante**, en virtud de que el actor se inconformó por el incremento de la base gravable del inmueble de su propiedad para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, contenido en la factura con número de folio 2100239825, de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, no lo relacionado a la aplicación de los estímulos fiscales.*

De igual manera es **inoperante** al argumento relativo a que “... *la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios en materia fiscal, que para efecto de restituir a la parte actora únicamente se debe liberar la parte que se considere excesivo el pago del 2021 al del 2020, no así en forma total, pues en caso de concederse en su totalidad se causaría un detrimento económico a la hacienda municipal, que en el caso concreto la parte actora realizó el mismo pago por el impuesto predial tanto en el ejercicio 2020 y 2021, por lo que no existe perjuicio, a su patrimonio y no es viable que se le exima de pago ni que se realice la devolución solicitada...*” lo anterior, en virtud de que de la resolución definitiva recurrida no se desprende que la A quo haya ordenado a la demandada se exima o devuelva a la parte actora la totalidad del pago realizado por concepto de impuesto predial, por el contrario, se observa que el efecto fue para que las autoridades dejen insubsistente el cobro realizado al actor mediante Comprobante Fiscal Digital de Internet (CFDI) con número de folio 2100239825, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativo a la cuenta catastral 009-010-002-0000, correspondiente al periodo 01/2021 al 06/2021, respecto del inmueble ubicado en Lote -----
----- en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, y procedan a emitir el cobro del Impuesto Predial correspondiente al año dos mil veintiuno en el cual se respete la base gravable por la cantidad de \$12,480.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al año fiscal dos mil veinte, contenida en el Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI) con número de folio 2000107028 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, el cual fue realizado por el actor, y de resultar diferencias a su favor se realice la devolución correspondiente.

Por cuanto al agravio relativo a que la A quo no analizó ni valoró las

pruebas que integran el juicio, es **inoperante** debido a que la recurrente no precisa qué pruebas dejaron de analizarse y no fueron valoradas, en consecuencia, este Órgano revisor no puede analizar de manera oficiosa y de nueva cuenta todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda y en la contestación de demanda como si fuera primera instancia, en virtud de que recae en la parte recurrente la carga de probatoria para señalar qué prueba no fue valorada; haciendo la aclaración que dicha exigencia, no llega al extremo de pretender que mencione el alcance probatorio que considere le corresponde, sino que bastaría con solo precisar a cuál o cuáles de ellas se refiere para proceder a su estudio, sin embargo, en el presente caso, el recurrente al expresar sus agravios, no cumple con la citada exigencia, de ahí lo inatendible del agravio que se analiza.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2ª./J. 172/2009, con número de registro 166033, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, que establece lo siguiente:

“AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe valorarlas en la sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la materia, y cuando omite hacerlo comete una violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer párrafo, de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 69/2000, de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", así como con el principio procesal relativo a que las partes

exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada; luego, exigir al recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del medio de convicción eludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En esas circunstancias, no basta la sola expresión de argumentos genéricos y abstractos para que esta Sala Superior proceda al estudio de oficio de la sentencia recurrida, sino que se deben precisar o especificar argumentos tendientes a desvirtuar las consideraciones que sustentan el fallo; es por ello que este Órgano Colegiado considera que los agravios relativos a que no se respetaron los principios de legalidad, al omitir pronunciarse de todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, y que no se analizaron ni valoraron las pruebas que integran el juicio, son ambiguos y superficiales, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, en cuanto a que no logran construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su inconformidad, ello en razón de que los agravios de la revisión deben estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el Órgano colegiado, tal y como ocurre en el asunto en particular.

Resulta aplicable la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con número de registro 173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su

reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.”

LO SUBRAYADO ES NUESTRO

En las narradas consideraciones, al resultar **infundados e inoperantes** los agravios expresados por la autorizada de las demandadas Director de Catastro e Impuesto Predial y Secretario de Administración y Finanzas, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para revocar la sentencia definitiva recurrida, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada, debe **CONFIRMARSE** la sentencia definitiva de fecha **seis de abril de dos mil veintidós**, emitida por la Sala Regional Acapulco I, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número **TJA/SRA/I555/2021**, en atención a las consideraciones expuestas en el presente fallo.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 fracciones V y VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, es de resolverse y se;

RESUELVE

PRIMERO.- Son **infundados e inoperantes** los agravios esgrimidos por la autorizada de los demandados Director de Catastro e Impuesto Predial y Secretario de Administración y Finanzas, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número **TJA/SS/REV/375/2022**, para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, en consecuencia;

SEGUNDO.- Se **CONFIRMA** la sentencia definitiva de fecha **seis de abril de dos mil veintidós**, emitida por la Sala Regional Acapulco I, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número **TJA/SRA/I/555/2021**, por los argumentos expuestos en el último considerando de la presente resolución.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, HÉCTOR FLORES PIEDRA, EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO MANCILLA, siendo ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -----

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA PRESIDENTE

**MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS**
MAGISTRADA

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA
MAGISTRADO

DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS
MAGISTRADA

LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA
MAGISTRADO

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca **TJA/SS/REV/375/2022** derivado del recurso de revisión interpuesto por las demandadas Director de Catastro e Impuesto Predial y Secretario de Administración y Finanzas, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través de su autorizada en el expediente **TJA/SRA/I/555/2021**.